

Estados y corporaciones transnacionales: una alianza estratégica en el extractivismo

Agosto, Patricia

Veröffentlichungsversion / Published Version

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:

Agosto, P. (2017). Estados y corporaciones transnacionales: una alianza estratégica en el extractivismo. *Revista Kavilando*, 9(2), 530-537. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-63754-7>

Nutzungsbedingungen:

Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden Sie hier:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de>

Terms of use:

This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Attribution-Non Commercial-NoDerivatives). For more information see:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>

Estados y corporaciones transnacionales: una alianza estratégica en el extractivismo

States and transnational corporations: a strategic alliance in extractivism

Por: Patricia Agosto¹

Recibido: octubre de 2017 *Revisado:* noviembre de 2017 *Aceptado:* diciembre de 2017

Resumen

El destino que han definido los estados para Nuestra América es la recreación del rol de proveedores de materias primas que ha marcado nuestra historia desde la conquista y colonización. El extractivismo marca los ritmos de las economías, las sociedades, las políticas estatales, las relaciones con la naturaleza y determina un rol diferenciado, jerárquicamente inferior, en las relaciones con los países del norte. Los estados en todos sus niveles crean las condiciones necesarias para que las empresas extractivas, la mayoría de ellas transnacionales, desplieguen sus inversiones y desarrollen sus mega emprendimientos, priorizando esos intereses antes que los derechos de las poblaciones y la naturaleza. Se trata de una alianza estratégica entre estados y corporaciones que ha provocado múltiples resistencias en las poblaciones de los territorios "sacrificables" al extractivismo, así como numerosas voces que desde las distintas vertientes del pensamiento/acción críticos plantean caminos para construir alternativas a este modelo de "desarrollo" que, en su afán de lograr un supuesto progreso para nuestros países, no hace más que profundizar la mercantilización de la vida y de los territorios.

Palabras Clave. Extractivismo; Estados; Transnacionales; Complicidad capitalista; Alternativas.

Abstract

The destiny that the states have defined for Our America is the recreation of the role of suppliers of raw materials that has marked our history since the conquest and colonization. The extractivism marks the rhythms of the economies, the societies, the state policies, the relations with the nature and determines a differentiated role, hierarchically inferior, in the relations with the countries of the north. The states at all levels create the necessary conditions for extractive companies, most of them transnational, to deploy their investments and develop their mega enterprises, prioritizing those interests before the rights of populations and nature. It is a strategic alliance between states and corporations that has provoked multiple resistance in the populations of the territories "sacrifices" to extractivism, as well as numerous voices that from the different critical thought / action strands pose ways to build alternatives to this model of "Development" which, in its eagerness to achieve supposed progress for our countries, does nothing but deepen the commodification of life and territories.

Key Words. Extractivism; State; Transnational Capitalist complicity; Alternatives.

¹Historiadora, investigadora e integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Buenos Aires, (Argentina). Contacto: patoagosto@gmail.com

Extractivismo, un modelo que atraviesa Nuestra América

La crisis multidimensional que atraviesa el sistema capitalista global en la actualidad ha vuelto imperiosa la profundización del extractivismo, que fue el destino impuesto a Nuestra América desde la conquista y colonización; y hoy esa forma de desangrar nuestros territorios y poblaciones tiene nuevos perfiles.

La depredación, el fraude y la violencia de las que se nutre la acumulación del capital son intrínsecos al sistema capitalista y han sido persistentes más allá de su etapa originaria, en la que, según explica Marx en *El Capital*, se imponen los primeros cercamientos de las tierras comunales en Europa, que provocaron la separación violenta de los productores de sus medios de producción y subsistencia. Ya en 1912, Rosa Luxemburgo (2015) analizaba que la violencia, el engaño, la opresión y el pillaje han sido los mecanismos constantes de la acumulación de capital en el proceso histórico, no sólo en el origen del sistema capitalista, y esto implica la aniquilación de toda formación social que sea obstáculo a la acumulación. En este sentido, expresa:

El método violento es, aquí, el resultado directo del choque del capitalismo con las formaciones de economía natural que ponen trabas a su acumulación. El capitalismo no puede prescindir de sus medios de producción y sus trabajadores, ni de la demanda de su plusproducto. Y para privarles de sus medios de producción y sus trabajadores; para transformarlos en compradores de sus mercancías, se propone, conscientemente, aniquilarlos como formaciones sociales independientes.

A su vez, en el proceso de conformación del capitalismo como sistema mundial, las partes constitutivas de esa economía-mundo quedaron articuladas, a través de roles diferenciados y jerarquizados, por primera vez en la historia de la humanidad. Así se produjo una división social del trabajo a nivel mundial a través de la cual se distinguieron jerárquicamente, áreas centrales del sistema, con actividades económicas complejas, y zonas periféricas, productoras de bienes primarios, integrando los procesos productivos a través de un mercado y un modo capitalista de producción y basando las relaciones entre las partes constitutivas de esa economía-mundo en un intercambio desigual. Se trata de una distinción y jerarquización entre metrópolis imperiales y territorios coloniales, estos últimos sometidos al saqueo extractivista como productores y proveedores de bienes primarios. Por eso, *“el extractivismo es un fenómeno estructural, históricamente delimitado a la moderna era del Capital”* (Machado Aráoz, 2016).

Si bien se trata de un proceso histórico de acumulación por desposesión (Harvey, 2004) y despojo, desde hace algunas décadas hablamos de recolonización del continente, considerando que la reproducción del papel de América Latina como proveedora de materias primas a los países del norte tiene una nueva versión, basada en el predominio de capitales extranjeros, especialmente transnacionales, en las actividades extractivas.

A su vez, en la actualidad, la explotación y el despojo de los bienes comunes ha adquirido una escala superior debido al aumento de las necesidades de bienes comunes por parte de los países desarrollados -que han agotado esos bienes en sus propios territorios-, las presiones que ejercen sobre los países que todavía los

poseen y las innovaciones científico-tecnológicas, que han dado lugar a nuevos mecanismos que desembocan en la mercantilización y privatización de la naturaleza, de toda forma de vida, de nuestras culturas e historias y de la creatividad intelectual popular y colectiva.

Además, en un contexto como el actual, de descenso de los precios internacionales de los “commodities”, la presión sobre los bienes comunes se ha incrementado aún más, con el fin de mantener las ganancias de los capitales invertidos en las actividades extractivas y consolidar un extractivismo empresarial, con mínima intervención y regulación económica por parte del estado, como viene ocurriendo en el continente con la avanzada de gobiernos neoliberales, que en algunos países reemplazaron a los gobiernos llamados progresistas. Como el crecimiento económico es considerado sinónimo de desarrollo, todos los gobiernos apuestan a que éste se logra con el aumento de las exportaciones extractivas. Como nos propone analizar Alberto Acosta, los gobiernos progresistas que propusieron un extractivismo con mayor regulación del estado que, según Gudynas (2016), en varios casos se convirtió en empresario, buscaron llegar a la modernidad a través de los recursos generados por este modelo, donde una parte de las rentas generadas por las actividades extractivas se destinó a políticas sociales de mayor extensión social. Estas políticas son analizadas por algunos autores como “contrainsurgentes” (Zibechi, 2011), es decir, que tienen el propósito de desmovilizar y cooptar a los movimientos sociales, evitando insurgencias desde abajo, incluso en los países con gobiernos protagonistas de procesos de transformación más radicales, como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador, la producción y las exportaciones no han tenido cambios

significativos y los grandes grupos empresariales no han dejado de obtener ganancias significativas gracias al extractivismo (Acosta (2012). Tal como lo expresa De Sousa Santos (2014), en estos países *“el modelo de “desarrollo” es flexible en la distribución social, pero rígido en su estructura de acumulación”*.

Estados, complicidad y extractivismo

Cuando analizamos este modelo de “desarrollo” que cruza todo el continente, nos preguntamos por qué operan como lo hacen las corporaciones transnacionales extractivas y por qué en ninguna instancia de toma de decisiones se pone freno a ese accionar. Y allí encontramos que esas corporaciones cuentan con el apoyo de los organismos financieros internacionales, la garantía de los estados en todos sus niveles y un marco legislativo favorable.

Los estados plantean en su discurso y su accionar que esas megaempresas son necesarias para lograr el “desarrollo” y el “progreso” de nuestros países y que los territorios deben ser sacrificados en pos de ese objetivo. Y así los estados se convierten en garantes y cómplices de la implementación de este modelo de la mano de las transnacionales.

Las estrategias puestas en práctica desde los poderes políticos para construir esa complicidad son múltiples. Mencionaremos algunas de ellas: el pago de sobornos a funcionarios públicos para que oculten información sobre las consecuencias de los emprendimientos extractivos y con frecuencia

eviten la elaboración de serios estudios de impacto ambiental y social de los mismos; el mecanismo conocido como “puertas giratorias”, a través del cual altos funcionarios de la administración pública pasan a ocupar cargos importantes en las empresas y viceversa, cuyo objetivo es conocer e influir en las decisiones gubernamentales; y las respuestas favorables a las presiones de las corporaciones para formular políticas nacionales, derogar o sancionar normativas e imponer o remover funcionarios (Sentencia final, 2011).

Otra estrategia es la construcción de infraestructura para concretar el saqueo de nuestros bienes comunes. En este sentido, los proyectos de la Iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), -retomados por el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de la UNASUR-, se construyen con dinero obtenido de préstamos de los organismos financieros internacionales, incrementando el endeudamiento de los países en pos de construir carreteras, hidrovías, puentes, puertos, gasoductos, oleoductos, megarepresas, acueductos, telecomunicaciones, que permiten el saqueo rápido y barato de nuestras riquezas naturales. Según los documentos oficiales, se trata de una estrategia geopolítica que busca potenciar y elevar la competitividad y productividad a través de la integración física de la región; sin embargo, y de acuerdo a muchas consecuencias que han traído los proyectos que ya se están implementando, se trata de un nuevo reordenamiento territorial que responde a intereses ajenos a los de las poblaciones y comunidades que habitan los territorios afectados.

La implementación del modelo extractivista ha

generado “zonas de sacrificio” en nuestros países -“sacrificadas” para que se puedan desarrollar allí las actividades extractivas con todas sus consecuencias destructivas-, en las que se produce un proceso que podemos denominar de “desestización”, ya que las empresas asumen funciones relacionadas con políticas sociales que corresponderían al estado, aún en su versión más liberal. Así, mediante la responsabilidad social empresarial (RSE), las grandes corporaciones desarrollan proyectos “comunitarios” en las poblaciones afectadas -o que lo serán- por sus emprendimientos. Se trata en realidad de políticas de cooptación y asistencialismo que tienen como propósito lograr la licencia social necesaria para el despliegue de sus emprendimientos, asociando su presencia en los territorios con la llegada del desarrollo local, para lo cual cuentan con el apoyo de los discursos oficiales.

Ejemplificamos el despliegue de esta estrategia con las formas de operar de la empresa Monsanto, que intentó instalarse en una localidad de la provincia de Córdoba en la Argentina. Además de haber comenzado a construir la planta de procesamiento de maíz transgénico de manera ilegal, es decir, sin un estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado por las autoridades de aplicación, la gran corporación de los agronegocios buscó en todo momento comprar voluntades a través del programa más importante de responsabilidad social corporativa que desarrolla en la región sur de América Latina, Semillero de Futuro. No casualmente, en 2013 Córdoba fue la provincia con el mayor número de proyectos financiados y tampoco fortuitamente, una de las localidades beneficiadas con la compra de un generador de energía eléctrica, fue la localidad de Malvinas

Argentinas (Agosto, 2015).

La otra cara de la ausencia del estado en la resolución de los derechos básicos de las poblaciones es el proceso de desterritorialización de los mismos, es decir, en las “zonas de sacrificio” el estado ha entregado su soberanía a poderes empresariales, casi siempre transnacionales. Se trata entonces de estados que pierden el control sobre una parte de su territorio, en la cual no tienen autoridad política; sin embargo, hay una doble función en el modelo extractivista de la cual no se desprenden los estados: disciplinar a las poblaciones y legitimar los mega emprendimientos. Los estados se desentienden de parte del territorio nacional y esa desatención

Conduce a un manejo desorganizado y no planificado de esas regiones que, inclusive, quedan en la práctica muchas veces al margen de las leyes nacionales. Todo eso consolida un ambiente de violencia generalizada, pobreza creciente y marginalidad que desemboca en respuestas miopes y torpes de un Estado policial, que no cumple sus obligaciones sociales y económicas. (Acosta, 2012)

Una estrategia más, de extrema gravedad por el incremento de su implementación, es la represión, criminalización y judicialización de la protesta social de quienes se oponen a los proyectos empresariales, muchas veces acompañadas por la militarización de los territorios en conflicto. En esta estrategia represiva participan fuerzas de seguridad públicas provinciales y nacionales - manifestando otra vez la complicidad de los poderes políticos- junto con fuerzas represivas privadas contratadas por las empresas. De esta forma, desde el estado se atenta contra las acciones colectivas y las organizaciones

sociales que las protagonizan, a las que se las tilda, en discursos políticos y mediáticos que sostienen y justifican las acciones represivas, de fundamentalistas, perturbadoras del orden y opositoras al “progreso” y al “desarrollo” (Composto & Navarro, 2014).

Desde el punto de vista legal y judicial, los estados protegen los intereses de las grandes empresas a través de la aprobación de una normativa que las favorece y/o la negación a poner en práctica legislación existente que defiende los intereses de las poblaciones y de la naturaleza. La ausencia de audiencias y consultas públicas y la ignorancia de convenios aprobados que defienden ese derecho -como el Convenio 169 de la OIT referido a la consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios cuando vean amenazados sus territorios por un emprendimiento- son otras de las estrategias que demuestran que las empresas cuentan con la garantía de los poderes políticos para desarrollar sus inversiones.

Ponemos como ejemplo el caso de la megaminería en la Argentina. El andamiaje legal que impulsa y favorece esta actividad extractiva se viene construyendo desde la década de los 90. Con la reforma constitucional de 1994, los recursos mineros pasan a manos de los gobiernos provinciales (Tolón Estarrelles, 2011), teniendo las provincias la autonomía para concretar negocios con las corporaciones del sector. Algunas de las normativas que favorecen a las grandes empresas mineras son el otorgamiento de estabilidad fiscal durante 30 años, de la que no goza ningún habitante de la Argentina; y el establecimiento de regalías mineras no superiores al 3% sobre el valor boca de mina del mineral extraído.

Si todos los gobiernos de Nuestra América creen que el extractivismo es nuestro destino manifiesto y que encamina a nuestros países hacia el “progreso” y el “desarrollo”, y frente a este convencimiento no importan los sacrificios de territorios y poblaciones que haya que hacer, no es allí donde van a proponerse alternativas. Es en otros lugares y desde otros tiempos donde se escuchan propuestas de construcción de otra manera de estar en el mundo.

Múltiples voces que hablan de alternativas

Frente a la avanzada extractivista y la complicidad de los estados en su ejecución, surge una pregunta de rigor: ¿desde dónde se construyen las alternativas? Y la primera respuesta es desde los pueblos y comunidades en resistencia, los movimientos sociales, los pueblos originarios, las corrientes feministas, entre otras maneras rebeldes de construir emancipaciones.

Rescatando las múltiples voces de pensamiento y acción críticos, Arturo Escobar nos propone ampliar el espacio epistémico y social de lo que denominamos tradicionalmente pensamiento crítico latinoamericano e incluir, junto con el pensamiento de izquierda, a dos vertientes que han aportado a la producción crítica en las últimas décadas: el pensamiento autónomico y el pensamiento de la Tierra. El primero surge de los múltiples procesos que, a lo largo del continente, apuntan a la autonomía a partir de la reconstitución de lo comunal y de la territorialidad; el segundo nace de la conexión con la Tierra y con todos los seres vivos que

tiene toda comunidad que habita un territorio y que se expresa en prácticas económicas, culturales y espirituales, así como en las luchas territoriales y de defensa de la Pachamama (Escobar, 2014). Nos parece imprescindible sumar a estas tres vertientes los aportes del feminismo popular, entre los cuales destacamos la necesidad de despatriarcalizar la sociedad y la denuncia del uso del trabajo gratuito de las mujeres en el capitalismo, planteando la necesidad de revalorizar el cuidado de la vida humana como una responsabilidad social, política y ecológica, necesaria para pensar otros mundos posibles (Celiberti, 2014). Entre las vertientes feministas, el ecofeminismo tiene un parentesco directo con el pensamiento de la Tierra, ya que nos propone analizar las relaciones de opresión tanto entre hombres y mujeres como entre las sociedades humanas y la naturaleza. Hace ya más de veinte años, Vandana Shiva (2015) nos decía que el modelo productivo imperante, con sus bases patriarcales,

rompe la unidad cooperativa de lo masculino y lo femenino y pone al hombre, despojado del principio femenino, por encima de la naturaleza y la mujer y separado de ambas. La naturaleza y la mujer han sido convertidas en objetos pasivos para ser usadas y explotadas por los deseos descontrolados e incontrolables del hombre alienado. De creadoras y sustentadoras de la vida, la naturaleza y la mujer están reducidas a ser “recursos” en el modelo del mal desarrollo, fragmentado y contrario a la vida

Pensar alternativas al mal desarrollo extractivista requiere un diálogo fluido entre estas vertientes, como una forma de evitar la imposición de un pensamiento que se defina universal, único y poseedor de “la” verdad. No

nos referimos en este caso al pensamiento único planteado como fin de la historia, sino a los dogmatismos que hemos construido desde la izquierda, que durante mucho tiempo fue “una” izquierda.

Sólo desde este pluviverso de pensamientos y prácticas podremos construir alternativas al extractivismo, al capitalismo, al patriarcado, al colonialismo, a la mercantilización de las expresiones humanas y naturales. Desde allí, reconstruiremos el tejido de la vida y de la

naturaleza y construiremos territorios populares donde las comunidades tengan autonomía y participación en las discusiones sobre el uso de los bienes comunes - reemplazando las decisiones unilaterales llevadas a cabo por corporaciones transnacionales y estados-, en busca de preservar y recuperar los sentidos de la vida construidos en esos territorios, siempre y necesariamente con un horizonte postextractivista.

Referencias bibliográficas

- Acosta, A. (2012). Extractivismo y neoextractivismo: dos caras de la misma maldición. En: Más allá del desarrollo. Grupo permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo. Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo, Abya Yala y América Libre
- Agosto, P. (coord.) (2015). Malvinas, un pueblo en lucha contra Monsanto. Buenos Aires: Ediciones América Libre
- Agosto, P. (2003). Wallerstein y la crisis del estado-nación. Madrid: Campo de Ideas, SL.
- Celiberti, L. (2014). Izquierda, ¿con respecto a qué? En: Gudynas, Svampa, et al. Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. Barcelona: Edición Entrepueblos
- Colectivo Voces de Alerta (2011). 15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina. Buenos Aires: Herramienta Ediciones y Editorial El Colectivo
- Composto, C. & Navarro, N, L. (2014). Claves de lectura para comprender el despojo y las luchas por los bienes comunes naturales en América Latina”. En: Composto, Claudia y Navarro, Nina Lorena (comp): Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina. México: Bajo Tierra Ediciones
- De Sousa Santos, B (2014). ¿Reinventar las izquierdas?. En: Reinventar la izquierda en el siglo XXI. Hacia un diálogo Norte-Sur. José Luis Coraggio y Jean-Louis Laville (organizadores). Los Polvorines: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Escobar, A (2014). Desde abajo, por la izquierda y con la Tierra: La diferencia de Abya Yala/Afro/Latino-América. En: Gudynas, Svampa, et al. Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. Barcelona: Edición Entrepueblos
- Gudynas, Eduardo (2016). Los progresismos sudamericanos: Ideas y prácticas, avances y límites. En: Gudynas, Svampa, et al. Rescatar la esperanza. Más allá del neoliberalismo y el progresismo. Barcelona: Edición Entrepueblos.
- Harvey, D (2004): El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. Buenos Aires: Clacso. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf>
- Llistar, David (2008). Clasificación de los impactos habituales de las transnacionales en la periferia. Revista Viento Sur (97)

- Luxemburgo, Rosa (2015) La acumulación del capital. Ediciones Hoy.
- Machado Aráoz, H (2016). El debate sobre el “extractivismo” en tiempos de resaca . Disponible en [www.rebellion.org: http://www.rebellion.org/noticia.php?id=211020](http://www.rebellion.org/noticia.php?id=211020)
- Sentencia final del Juicio Ético y Popular a las Transnacionales, desarrollado en la Argentina en el año 2011.
- Tolón Estarellas, G (2011). Situación actual de la minería en la Argentina. Serie Aportes N°13. Buenos Aires: AEDA (Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina) y Fundación Friedrich Ebert.
- Shiva, V (1995). Abrazar la vida: mujer, ecología y desarrollo. Cuadernos Inacabados (18). Madrid: Horas y Horas
- Zibechi, R (2011). Política & Miseria. La relación entre el modelo extractivo, los planes sociales y los gobiernos progresistas. Buenos Aires: Lavaca Editora

Nota

ⁱLa planta comenzó a construirse en enero de 2013 con la sola aprobación del aviso de proyecto por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. Es importante aclarar que después de cuatro años de intensa lucha, tanto a nivel local como nacional, a mediados del año pasado Monsanto anunció la venta del predio y el desmantelamiento de la planta.